

**66001310500120220024600 - BLANCA TERESA PEÑA LEON - Certificación de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial**

Lina Morales Lenis <lmoraleslenis@gmail.com>

Mar 30/08/2022 1:26 PM

Para: Juzgado 01 Laboral Circuito - Risaralda - Pereira <lcto01per@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buena tarde,

Me permito remitir certificación del comité de conciliación de Colpensiones, que se pronunció sobre el proceso identificado en el asunto del correo electrónico.

Anexo en formato PDF un (1) memorial y certificación.

--

***Lina Morales Lenis***  
***Abogada Externa Colpensiones***  
***Regional Eje Cafetero***  
***WORLD LEGAL CORPORATION***



Remitente notificado con  
[Mailtrack](#)

# WORLD LEGAL CORPORATION

## Attorneys Around the World



Pereira, treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Doctora  
**RUTH CLEMENCIA ZULUAGA ARISTIZABAL**  
**JUEZ PRIMERA LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA**  
E.S.D.

**ASUNTO: CERTIFICACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL**  
**RADICADO: 66001310500120220024600**  
**PROCESO: ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA**  
**DEMANDANTE: BLANCA TERESA PEÑA LEON 35329896**  
**DEMANDADO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**

**LINA MARIA MORALES LENIS** identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.088.291.344 de Pereira, Risaralda, portadora de la T.P. No. 254.522 del C. S de la J, actuando en mi calidad de Apoderada Sustituta de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, de conformidad con el poder a mi conferido de manera respetuosa me permito allegar la certificación expedida por el comité de conciliación y defensa judicial de la entidad dentro del proceso de la referencia.

Agradezco su atención,

**LINA MARIA MORALES LENIS**  
**CC. 1.088.291.344 de Pereira, Risaralda.**  
**TP. 254.522 del C.S de la J.**

	<b>Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial</b>		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

## CERTIFICACIÓN NO. 159002022

### La Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial

#### CERTIFICA

Que tal y como consta en el Acta No. 154-2022 del 25 de agosto de 2022 del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, respecto del caso **BLANCA TERESA PEÑA LEON** identificado(a) con cédula de ciudadanía No **35329896**, en proceso bajo radicado No **66001310500120220024600**, quien pretende; se declare la ineficacia y/o nulidad del traslado que hizo del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual por medio de la AFP COLFONDOS, así como el que se realizó de forma horizontal en el RAI a AFP PORVENIR?, dicho órgano decidió de manera unánime:

NO proponer fórmula conciliatoria, en consideración a lo siguiente:

Se tiene que la señora BLANCA TERESA PEÑA LEÓN, estuvo afiliado al Régimen de Prima Media con prestación definida, y se tiene que según lo afirmado en el libelo petitorio que suscribió formulario de afiliación con el Régimen de Ahorro Individual la AFP COLFONDOS el 29 de junio de 1999, y con la AFP PORVENIR el día 17 de mayo de 2000, de ahí que, las afiliaciones se realizaron de conformidad al artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que reza:

“b) La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley.

e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”;

Atendiendo a las particularidades del caso concreto, destáquese que al momento en que se expidió la Ley 100 de 1993, la señora BLANCA TERESA PEÑA LEÓN tuvo la posibilidad de escoger cualquiera de los dos regímenes que fueron creados, resultando que, con la suscripción del formulario con las AFP COLFONDOS y PORVENIR, respectivamente la demandante tomó la decisión de manera libre y espontánea de trasladarse de AFP, entendiéndose así, su deseo de acogerse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

	<b>Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial</b>		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

De ahí que, en el sub lite es el demandante quien debe acreditar que la información suministrada por la AFP del RAIS, fue equivocada o engañosa, resaltando que en los mismos hechos del libelo gestor se indica que la demandante se trasladó a las AFP COLFONDOS Y PORVENIR, respectivamente lo que expresa en principio no pueda pregonarse el error en la información, debido a que la voluntad de la señora BLANCA TERESA PEÑA LEÓN ha sido por 23 años permanecer en dicho régimen, sin que por otro lado, considere que la simple enunciación que el valor de la mesada pensional varía entre los dos regímenes, es motivo suficiente para acceder a las pretensiones del escrito demandador, debido a que, conforme las disposiciones de la Ley 100 de 1993 ambos regímenes pensionales concurren legamente, enfatizando que si el accionante tenía dudas acerca de la información suministrada, debió acudir directamente al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – ISS, para comparar cuál de los dos regímenes era el que más le beneficiaba, infiriendo que su desidia u omisión en aquel momento, en modo alguno puede considerar enmendar con el presente litigio, fundamentando que en la actualidad la información que se le comunicó fue engañosa.


Por otro lado, ese mismo artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en su literal e, indica:

“e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”;

En este contexto, no es posible que la señora BLANCA TERESA PEÑA LEÓN, se traslade del Régimen de Ahorro Individual al de Prima Media con Prestación Definida, toda vez que no es procedente dar trámite a la solicitud, por cuanto la información consultada indica que se encuentra a diez años o menos del requisito de tiempo para pensionarse.

Si en gracia de discusión su honorable Despacho considerara que es procedente declarar la nulidad o ineficacia del traslado de régimen pensional, debe tenerse en cuenta que el sub judice que la señora BLANCA TERESA PEÑA LEÓN al suscribir el formulario de afiliación con las AFP COLFONDOS Y PORVENIR, declaró bajo la gravedad de juramento haber escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad de manera libre, espontánea y sin presiones, por lo que se infiere que el traslado al RAIS se hizo bajo los parámetros establecidos en los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993, de ahí que, le concierna al actor demostrar que la información que se le suministró fue equivocada, con el propósito de obtener la declaración de ineficacia del aludido régimen pensional.

En cuanto a la presunta nulidad de la afiliación, las disposiciones jurídicas para resolver la Litis lo son por analogía las prescripciones del Código Civil, que indican verbigracia en el artículo 1741 del C.C., que la nulidad de los actos jurídicos o de los contratos, cuando tiene un origen diverso del objeto o causa ilícita, como un vicio del consentimiento, sólo genera nulidad relativa, que da lugar a la rescisión del acto o contrato, evento en el cual, se aplican los artículos 1502, 1508 y 1604 Ibídem; resultando perentorio el texto del artículo 1750 C.C., que a renglón seguido indica que el plazo para pedir la rescisión del contrato durará cuatro (4) años, así, si el traslado de la señora BLANCA TERESA PEÑA LEÓN tuvo efectividad en la AFP COLFONDOS el 29 de junio de 1999, evidenciándose que si existió algún tipo de error en el consentimiento el mismo ha quedado saneado con el paso del

	<b>Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial</b>		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

tiempo, ya que, la presente acción sólo se vino a incoar casi veintitrés (23) años años después de la primera suscripción del formulario a la AFP del RAIS; así:

“Artículo 1741. Nulidad absoluta y relativa: La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.

Hay así misma nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces.

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato.

Artículo 1750. Plazos para interponer la acción rescisión: El plazo para pedir la rescisión durara cuatro años.

Este cuatrienio se contará, en el caso de violencia, desde el día en que ésta hubiere cesado; en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato.

Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el cuatrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad.


A las personas jurídicas que por asimilación a los menores tengan derecho para pedir la declaración de nulidad, se les duplicará el cuatrienio y se contará desde la fecha del contrato.

Todo lo cual se entiende en los casos en que las leyes especiales no hubieren designado otro plazo”.  
(Subrayado fuera del texto original).

Lo anterior en aras de demostrar que ha quedado saneado con el tiempo las nulidades relativas que hubiesen podido surgir, pues como se evidencia en el escrito de la demanda, se tiene que la parte actora si recibió información para su traslado tal y como lo manifiesta, evidenciándose que si existió algún tipo de error en el consentimiento el mismo ha quedado saneado con el paso del tiempo y la prescripción de la acción rescisoria.

En igual sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia reciente, SL-17595 de 2017 con ponencia del Doctor Fernando Castillo Cadena, aplicable en este caso, independientemente de si el afiliado es beneficiario o no del régimen de transición, ha indicado que el acto jurídico de traslado de régimen es ineficaz, cuando no media la libre escogencia, que solo la habrá:

“cuando se proporcione la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica” para más adelante agregar que “Aquí y ahora, se recuerda que no es dable argüir que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de

	<b>Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial</b>		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito”. (Subrayado fuera del texto original).

Anudado a lo anterior, es pertinente traer a colación reciente pronunciamiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Magistrada Ponente Dra. Olga Lucia Hoyos Muñoz, en proceso de radicado Nro. 66001-31-05-003-2018-00133-01, la cual señala:

“(…) No obstante, tal entendimiento de la norma jurídica invocada por la Corte Suprema, no se comparte por la Sala Mayoritaria de esta colegiatura, tal como se ha advertido a partir de las aclaraciones de voto de uno de sus integrantes, en tanto que la acción a incoar en realidad corresponde a la resarcitoria de perjuicios. (…)


... Ahora, la posición ya descrita de ninguna manera deja al garete a los afiliados que se trasladaron de régimen debido a la omisión del deber de información de las AFP (error u omisión), y que ahora, por lo general 20 años después, reclaman ante la administración de justicia, no porque se encuentre inconformes con los beneficios del RAIS..., sino porque el valor de la mesada pensional esperada no es lo suficientemente alto como desean para vivir durante su ancianidad, en contraste con la que recibiría de haber permanecido o escogido el RPM.

Para remediar tal inconformidad el legislador contempló una acción diferente como es el resarcimiento de perjuicios, prescrito en el artículo 10 del Decreto 720 de 1994 – vigente para la época de los hechos –, que establece:

“Responsabilidad de los promotores: cualquier infracción, error u omisión – en especial aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados – en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad administradora respecto de la cual adelante sus labores de promoción o con la cual, con ocasión de su gestión, se hubiere realizado la respectiva vinculación sin perjuicio de la responsabilidad de los promotores frente a la correspondiente sociedad administradora del sistema general de pensiones”. (…)

Puestas de este modo las cosas, si el supuesto de hecho expuesto en las demandas se encuentra dirigido a probar que el promotor de la AFP omitió o erró en la información otorgada para que el trabajador pudiese elegir a cuál régimen pensional quería pertenecer, y esto le ocasionó un perjuicio, por el valor de la mesada que será otorgada en el RAIS, entonces la acción a emprender no es la ineficacia de la afiliación, sino la de resarcimiento de perjuicios, sin que a través de esta se permita la nueva elección de régimen pensional o retorno al anterior, que es la consecuencia de salir avante la ineficacia, que por el principio de legalidad no puede extenderse a estos supuestos fácticos. (…)” (Negrilla fuera de texto)

SENTENCIA SL4420-2021 DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL Por lo tanto, lo que define que un caso se resuelva declarando o no la nulidad, depende del ejercicio probatorio que hayan hecho las partes dentro del proceso a fin de esclarecer si la persona estaba o no debidamente informada. Ello conlleva a sostener, que se trata de discusiones eminentemente

	<b>Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial</b>		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

casuísticas que no pueden convertirse en reglas generales de criterio, sino en consideraciones intrínsecamente atadas a lo que se ponga de manifiesto dentro del litigio.

En ese orden de ideas, es posible concluir que, aun cuando no haya certeza de si la persona recibió al momento de su traslado toda la información requerida, existen otros mecanismos que permiten colegir que tenía vocación de permanencia en el régimen y que contaba con todos los elementos para forjar con plena convicción su elección.

Dichos comportamientos o actos de relacionamiento, en los casos de afiliación, pueden verse traducidos en acciones concretas tales como presentar solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves, entre otros. Así lo ha establecido esta Corporación en el fallo CSJ SL413-2018, en donde dijo que,


Por esta misma razón, en casos como el presente, donde se discute la materialización del acto jurídico de la afiliación o traslado, es relevante tener en cuenta los aportes al sistema, no como un requisito ad substantiam actus de la afiliación, como lo sostuvo el Tribunal, sino como una señal nítida de la voluntad del trabajador cuando existen dudas razonables sobre su genuino deseo de cambiarse de régimen.

Desde luego que, para la tesis que ahora sostiene la Sala, la presencia o no de cotizaciones consistente con el formato de vinculación no es la única expresión de esa voluntad, pueden existir otras, tales como las solicitudes de información de saldos, actualización de datos, asignación y cambio de claves, por mencionar algunos actos de relacionamiento con la entidad que pueden denotar el compromiso serio de pertenecer a ella. Lo importante es que exista correspondencia entre voluntad y acción, es decir, que la realidad sea un reflejo de lo que aparece firmado, de modo tal que no quede duda del deseo del trabajador de pertenecer a un régimen pensional determinado (negrillas fuera del texto).

A partir de lo expuesto en precedente, se tiene que los traslados horizontales dentro del Régimen de Ahorro Individual, es decir los cambios entre administradoras de fondos privados de pensiones, pueden considerarse como un acto de relacionamiento, lo cual permite suponer el deseo de continuar en dicho régimen.

Incluso, tales actuaciones presuponen cierto conocimiento de la persona respecto del funcionamiento del régimen, sus beneficios y desventajas y su modo de operar, de ahí que su intención sea continuar en él, aun teniendo la posibilidad eventual de retornar a Colpensiones.

Finalmente, resulta importante destacar que la teoría de los actos de relacionamiento no constituye precisamente un cambio de jurisprudencia o una modificación al criterio asentado por la Sala Permanente frente a los casos de nulidad de traslado que se discuten. Lo anterior, en tanto que ha sido esta Corporación la que ha forjado una línea de pensamiento tendiente a priorizar los comportamientos de las afiliadas respecto de las formalidades que en muchas ocasiones consagra la ley como requisito para constituir un acto jurídico.

	<b>Certificación de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial</b>		CÓDIGO:	
			VERSIÓN:	
			FECHA:	

En ese sentido, la Sala construye sus fallos y resuelve los escenarios tanto fácticos como jurídicos que en sede extraordinaria se plantean, a partir de las diferentes reglas que se han venido consolidando jurisprudencialmente. Con lo cual, no se trata de ser estáticos ni asumir el rol de meros repetidores judiciales, sino de entender los diferentes escenarios en los que discurren las controversias laborales y de seguridad social para así darles una solución integral y acorde con los postulados propios de un órgano de cierre.

Dado lo anterior, no debe existir animo conciliatorio, toda vez que se ha mostrado que las AFP COLFONDOS Y PORVENIR, vincularon a la señora BLANCA TERESA PEÑA LEÓN de manera correcta, respetando la norma para dicho momento en el que elevo la solicitud de retorno al Régimen de Prima Media para el 6 de junio de 2022, ya contaba con menos de diez (10) años para pensionarse.

La presente certificación se emite en la ciudad de Bogotá a los 26 días del mes de agosto de 2022.



**MARIA ISABEL CAMPO MARTINEZ**  
Secretaria Técnica de Comité de Conciliación y  
Defensa Judicial de Colpensiones